



Resolución Gerencial Regional **Nº 0290-2016-GRA/GRTC**

El Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional - Arequipa;

VISTO:

El Expediente Reg. 10762-2016 y el Recurso de Apelación Reg. 67927-2016 interpuesto por la EMPRESA DE TRANSPORTES PERU BUS MAFER EIRL contra la Resolución Sub Gerencial Nº 326-2016-GRA/GRTC-SGTT; y,

CONSIDERANDO:

Que, con el expediente Reg. 10762, de fecha 28-01-2016, la EMPRESA DE TRANSPORTES PERU BUS MAFER EIRL, con RUC 20558096072, representada por su Titular – Gerente doña Mary Lucelia Rivera Cárdenas, solicita autorización para prestar servicio de transporte regular de personas de ámbito regional, en la ruta Arequipa – Centro Poblado Santa María La Colina y viceversa perteneciente a la provincia de Caylloma, al amparo de la Ordenanza Regional Nº 101-AREQUIPA, modificada por la Ordenanza Regional Nº 239-AREQUIPA en concordancia con el Art. 20 numeral 20.3.2 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por el D.S. 017-2009-MTC, presentando la documentación que aparece acompañada a su solicitud;

Que, mediante la Resolución Sub Gerencial Nº 161-2016-GRA/GRTC-SGTT de fecha 23-03-2016, se le declara improcedente la solicitud de autorización para prestar servicio de transporte regular de personas de ámbito regional en la ruta Arequipa – Centro Poblado Santa María La Colina y viceversa, porque el Centro Poblado Santa María de la Colina, lugar de destino de la autorización solicitada por la transportista, se encuentra ubicado en el distrito de Majes, de la Provincia de Caylloma, de la Región Arequipa, el mismo que está formando parte del área urbana de dicho distrito; y, porque estaría interfiriendo las competencias de los niveles del Gobierno Local;

Que, no conforme con dicha resolución, dentro del plazo de ley, la transportista interpone recurso de reconsideración en su contra, argumentando que la recurrida deniega su pedido por los hechos contenidos en el considerando octavo y noveno, esto es que el Centro Poblado Bello Horizonte (Caylloma) está formando parte del área urbana de dicho distrito y que de acuerdo a lo señalado en el Oficio Nº 004-OTYCV-2016-AG.Nº1 firmado por el Sub Gerente de Transporte y Comunicación Vial de la Municipalidad Provincial de Caylloma, estaría interfiriendo competencias locales hechos que dice los está desvirtuando con dicho escrito y los medios probatorios que adjunta.

Que, a través de la Resolución Sub Gerencial Nº 0326-2016-GRA/GRTC-SGTT del 15 de junio del 2016, se declara infundado el Recurso de Reconsideración interpuesto por la transportista, fundamentando su negativa en que la transportista no ha acreditado la creación y fundación del Centro Poblado Santa María La Colina y que dicho Centro Poblado no se encuentre dentro del área urbana del distrito al cual pertenece y además no ha acreditado que el centro poblado cuenta con un mínimo de mil habitantes mayores de edad, agregando, que se establece que la transportista no ha podido desvirtuar las observaciones realizadas en la Resolución Sub Gerencial Nº 161-2016-GRA/GRTC-SGTT;

Que, en los términos que aparecen en su escrito Reg. 67927 de fecha 27 de junio del año en curso, no conforme con la decisión tomada, la transportista, dentro del plazo de quince (15) días establecido por la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444, interpone recurso de apelación contra la Resolución Sub Gerencial Nº 326-2016-GRA/SGTT que declara infundado su Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución Sub Gerencial Nº 161-2016-GRA/GRTC-SGTT de fecha 23 de marzo del 2016, de conformidad con el Art. 209º de la citada Ley, solicitando se eleve todo al superior en jerarquía a fin de que revoque la apelada;





Resolución Gerencial Regional Nº 0290-2016-GRA/GRTC

Del debido procedimiento administrativo:

Que, el derecho fundamental al debido proceso o también conocido como tutela jurisdiccional efectiva importa que se reclame del Estado una asistencia jurisdiccional para que se *"haga justicia"*, y para ello éste (El Estado) provee un marco legislativo sustancial y procesal que operado por órganos jurisdiccionales hace que este pedido deba ser atendido dentro de un plazo razonable, aunque no necesariamente importa que se acceda a la petición formulada por el accionante. Este derecho de acudir e invocar la intervención del Estado ha merecido diversos tratamientos por la doctrina, en la medida de la evolución de las ideas políticas y las pugnas sociales, para luego dotarse de todo un contenido que es recogido en diversas Constituciones Políticas, entre ellas la nuestra, que en su artículo 139º inciso 3), establece que: *"Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional"*;

Que, sin embargo, este derecho es aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa, tal como lo ha establecido el Tribunal Constitucional al señalar *"(...) el debido proceso administrativo supone en toda circunstancia el respeto por parte de la administración pública de todos aquellos principios y derechos normalmente invocados en el ámbito de la jurisdicción común especializada y a los que se refiere el artículo 139 de la Constitución (...)"* (Exp. Nº 026-97-AA/TC). Además dicho Colegiado, en reiteradas ejecutorias ha establecido que el derecho reconocido en el artículo 139º, inciso 3) de la Constitución no sólo tiene una dimensión "judicial". *"En ese sentido, el debido proceso comporta el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. En el caso de los procesos administrativos, se debe cumplir con el procedimiento y formalidades establecidas por ley, respetando principios y requisitos mínimos que garanticen un proceso libre de arbitrariedades"*;

Que, en virtud a este principio que ha sido previsto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, los administrados tienen derecho a la existencia de un procedimiento administrativo previo a la producción de las decisiones administrativas que les incumban, a la no desviación de los fines del procedimiento administrativo así como al respeto de las garantías del procedimiento;

Que, de otro lado, uno de los elementos o facetas importantes del debido proceso es la motivación y la fundamentación de las resoluciones judiciales, el cual es concebido por Ticona Postigo en su libro "El debido proceso y la demanda civil" como *"(...) un acto intelectual de contenido crítico, valorativo y lógico que está configurado por el conjunto de razonamientos fácticos y jurídicos que sustentan la parte resolutive de aquella"* (refiriéndose a la sentencia). La importancia de este elemento del debido proceso ha significado que el mismo haya sido consagrado constitucionalmente en el inciso 5) del artículo 139 de la Carta Magna, al considerar que *"Son principios y derechos de la función jurisdiccional: la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los derechos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustenta"*;

Que, al igual que el derecho al debido proceso, la motivación de las resoluciones también tienen plasmación en el procedimiento administrativo y se constituye como el derecho que tienen los administrados a que las decisiones de las autoridades respecto a sus intereses y derechos hagan expresa consideración de los principales argumentos jurídicos y fácticos, así como de las cuestiones propuestas por ellos. La importancia de este derecho fundamental impone **que la violación o vulneración del**





Resolución Gerencial Regional Nº 0290-2016-GRA/GRTC

mismo, conlleva necesariamente la nulidad de los actos o decisiones administrativas. (Art. 10º inciso 1) de la Ley 27444);

Del principio de legalidad:

Que, el principio de legalidad en el derecho administrativo implica que los funcionarios públicos deben basar su actuación en las normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico vigente y no en un mero arbitrio o discreción; en tal sentido el jurista nacional Morón Urbina sostiene *"Como aplicación del principio de legalidad de la función ejecutiva, los agentes públicos deben fundar todas sus acciones –decisiones y consultivas– en la normativa vigente"*. En consecuencia la validez de toda la actuación administrativa está supeditada a que ésta se desarrolle observando el marco jurídico pendiente, pues es un principio pacíficamente admitido que los sujetos de derecho público sólo pueden hacer aquello que les sea expresamente facultado; es decir, la legitimidad de un acto administrativo no depende tan solo de que no sea contrario a la ley, sino que dicho acto debe ser realizado basado en alguna norma permisiva que le sirva de fundamento;

Del principio de impulso de oficio:

Que, en mérito a este principio de impulso de oficio contenido en el Artículo IV inciso 1.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, las autoridades administrativas deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. Al respecto, Danós sostiene que la justificación de este principio subyace en que la actuación administrativa debe orientarse a la satisfacción de los intereses públicos;

Que, asimismo, García de Enterría, respecto de este principio (al cual denomina "Principio de Oficialidad"), señala que *"la impulsión de oficio, que responde a las exigencias propias del interés público que el procedimiento administrativo pone en juego, da a éste un acusado carácter inquisitorial: la Administración, gestora del interés público, está obligada a desplegar por sí misma, ex officio toda la actividad que sea necesaria para dar adecuada satisfacción a ese interés, sea cual sea la actitud activa o pasiva, que puedan adoptar los particulares que hayan comparecido en el procedimiento (...)";*

Que, al respecto, el artículo 145º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, establece: *"La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal, así como evitar el entorpecimiento y demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida";*

Del acto administrativo contrario a derecho:

Que, conforme lo establece el artículo 1º de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444, los actos administrativos son las declaraciones de voluntad de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. La validez de los actos jurídicos está supeditada a que sean emitidos guardando conformidad con las normas jurídicas vigentes dictadas previamente para ordenar la expedición de los mismos, pero además debe reunir todos sus elementos esenciales previstos en el artículo 3º de la citada Ley 27444. Estos requisitos son: **a) Competencia**; es decir, que el acto administrativo debe ser emitido por el órgano competente por razón de la materia, territorio, grado, tiempo y cuantía; **b) Objeto o contenido ajustado a derecho**, el cual aparecerá siempre predeterminado por la respectiva norma, si se trata de una actividad reglada; o debe adaptarse al marco normativo, a los





Resolución Gerencial Regional N° 0290-2016-GRA/GRTC

principios del derecho o de razonabilidad, si se trata de una actividad discrecional; **c) Finalidad pública**, esto es adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades del órgano emisor; **d) Motivación**; eso significa que el acto administrativo debe estar debidamente fundamentado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico; y, **e) Procedimiento regular**, es decir, que la generación y emisión del acto debe seguir las formas y garantías previamente establecidas en la ley, tal como se ha señalado en los puntos anteriores;

Del caso materia de pronunciamiento:

Que, en su recurso de apelación la transportista señala que adjuntó todos los documentos necesarios que inclusive la recurrida los menciona en su Octavo Considerando, los que no fueron debidamente valorados, puesto que con ellos prueba que el Centro Poblado Santa María la Colina no se encuentra dentro del área urbana del distrito de Majes;

Que, con respecto al derecho a la prueba, debe señalarse que en la STC 6712-2005-HC/TC el Tribunal Constitucional precisó que uno de los contenidos de este derecho se encuentra constituido por el hecho de que las pruebas ofrecidas y actuadas dentro del proceso o procedimiento ***“sean valoradas de manera adecuada y con la motivación debida”***;

Que, del expediente aparece que la transportista conjuntamente con su recurso de reconsideración, efectivamente presentó como nueva prueba el Plano de Desarrollo Urbano de la ciudad de Majes y de sus Municipalidades menores, y la Constancia de Habitantes expedida por el Concejo Menor de Santa María La Colina, documentos que fueron desestimados por la impugnada, aduciendo que no son documentos emitidos por autoridad competente;

Que, al respecto la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, establece en su artículo 129° que para la creación de una Municipalidad de Centro Poblado deben comprobarse el cumplimiento de requisitos, entre los que se encuentran los señalados en los incisos 1 y 2: ***“1. Solicitud de un comité de gestión suscrita por un mínimo de mil habitantes mayores de edad domiciliados en dicho centro poblado y registrados debidamente y acreditar dos delegados. 2. Que el centro poblado no se halle dentro del área urbana del distrito al cual pertenece. (...)”***. (El resaltado es agregado);

Que, por lo tanto, con la Constancia de Habitantes expedida por la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de la Colina, ofrecida como nueva prueba por la administrada, suscrita por el alcalde de ese gobierno local, documento que tiene la calidad de público y por lo tanto de plena eficacia, a tenor de lo regido en nuestra legislación procesal civil que señala que un documento es *público* cuando es *“otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones”* (Art. 235° del Código Procesal Civil) y con la comprobación efectuada en esta instancia en el sistema de la SUNAT, comprobación que debió hacerla el ente inferior en aplicación del principio de impulso de oficio, ***se acredita la existencia del Centro Poblado de Santa María de La Colina***, y consecuentemente el cumplimiento del requisito exigido en el Art. 3.67 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, esto es ***que el Centro Poblado no se halle dentro del área urbana del distrito al cual pertenece y que cuenta con un mínimo de mil habitantes mayores de edad domiciliados en dicho centro poblado y debidamente registrados***;

Que, en consecuencia, esta instancia considera que la resolución cuestionada vulnera el derecho a la prueba, pues como se ha puesto de manifiesto en el fundamento precedente, que la autoridad subalterna no valoró en forma adecuada la Constancia de Habitantes expedida por la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de la Colina, ya que con la información contenida en ella se determina que dicho Centro





Resolución Gerencial Regional N° 0290-2016-GRA/GRTC

Poblado no se halla dentro del área urbana del distrito de Majes y que cuenta con un mínimo de mil habitantes mayores de edad debidamente registrados;

Además, este ente superior estima que la Resolución Sub Gerencial N° 326-2016-GRA/SGTT que declara infundado su Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución Sub Gerencial N° 161-2016-GRA/GRTC-SGTT de fecha 23 de marzo del 2016, ha vulnerado también el derecho al debido proceso, en la medida que ha emitido un pronunciamiento sin la motivación debida, asimismo, dicha resolución también está vulnerando el derecho al impulso de oficio, por cuanto debió verificar la existencia del Centro Poblado Santa María de la Colina, conforme se ha efectuado en esta instancia ante la SUNAT con el Registro Único de Contribuyente de dicha comuna;

Del cumplimiento de los requisitos para obtener una autorización para transporte regular de personas:

Que, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, en adelante RENAT, es uno de los reglamentos nacionales derivados de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que tiene por objeto regular la prestación del servicio de transporte público y privado de personas, mercancías y mixto en los ámbitos nacional, regional y provincial, estableciendo las condiciones de acceso y permanencia de carácter técnico, legal y operacional, que deben cumplir los operadores prestadores del servicio; los requisitos y formalidades para obtener una autorización o habilitación; y los procedimientos para la fiscalización del servicio de transporte en todos sus ámbitos, en procura de lograr la completa formalización del sector y brindar mayor seguridad a los usuarios del mismo, promoviendo que reciban un servicio de calidad;

Que, en ese marco, el citado RENAT, en su artículo 20° dispone que son condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público de personas bajo la modalidad de transporte regular de ámbito nacional, regional y provincial numeral 20.3.1 que correspondan a la categoría M3, clase III de la clasificación vehicular establecida en el Reglamento Nacional de Vehículos; pero, el numeral 20.3.2 dispone que los Gobiernos Regionales atendiendo a las características propias de su realidad, dentro del ámbito de su jurisdicción, mediante Ordenanza Regional debidamente sustentada, podrán autorizar la prestación del servicio regular de personas en vehículos de las categorías M3 de menor tonelaje o M2, en rutas en las que no exista transportistas autorizados que presten servicio con vehículos habilitados de la categoría señalada en el numeral 20.3.1;

Que, en efecto con fecha 22 de febrero del 2011, el Gobierno Regional de Arequipa, mediante Ordenanza Regional N° 130-AREQUIPA, en su artículo 1° **ratifica la facultad exclusiva y descentralizada del Gobierno Regional para el Otorgamiento de Autorizaciones para el Servicio de Transporte Público de Personas en rutas e itinerarios comprendidos dentro del ámbito de la Región Arequipa**, y en su artículo 2° ordena que las autorizaciones que se otorguen en mérito al artículo anterior, serán exclusivamente para vehículos de la categoría M-3 Clase III, con excepción de las rutas en las que no exista transportistas autorizados que presten el servicio con vehículos habilitados, casos en los cuales se podrá autorizar a vehículos de la categoría M-2, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el Reglamento Nacional de Administración de Transportes. Asimismo, a través de la Ordenanza Regional N° 239-AREQUIPA, se delimita la capacidad mínima de quince (15) pasajeros, sin contar el asiento del piloto, con que deben contar los citados vehículos de la categoría M2, **en dichas rutas donde no existan transportistas autorizados que presten servicio con vehículos habilitados de la categoría M3**, quedando exentos para tal efecto de cumplir con los requisitos requeridos por los numerales 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3, 20.1.8 y 20.1.11 del Decreto Supremo N° 017-2009-



Resolución Gerencial Regional Nº 0290-2016-GRA/GRTC

MTC y sus modificatorias, agregando que los vehículos autorizados no deberán contar ni utilizar asientos rebatibles;

Que, de lo manifestado en el punto precedente y de la revisión efectuada en los antecedentes de las autorizaciones otorgadas, que obran en el archivo de esta entidad, se ha logrado determinar que en la ruta solicitada Arequipa – Centro Poblado Santa María La Colina y viceversa, no existen transportistas que se encuentren autorizados para prestar el servicio de transporte regular de personas en vehículos de la categoría M3, por tanto, se dan las condiciones exigidas por la normatividad vigente para el otorgamiento de autorización en vehículos de la categoría M2;

Que, en este estado cabe señalar que esta entidad ha sido notificada con el Oficio Nº 866-2016-GRA/ORCI de fecha 07-11-2016 y su Anexo, emitido por el Jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Arequipa, a través del cual señala que de la verificación del expediente Nº 69582-2015 correspondiente a la solicitud autorización presentada el 31 de agosto del 2015, por la Empresa de Transporte y Turismo Babilcor SRL, así como del expediente Reg. Nº 79011-2015 presentado por la Empresa de Transportes Perú Bus Andes EIRL solicitando autorización para prestar servicio de transporte regular de personas en idéntica ruta a la solicitada por la Empresa Babilcor SRL, "Arequipa – Bello Horizonte (Caylloma) y viceversa", la Sub Gerencia de Transporte Terrestre de la GRTC aplicó criterios distintos en la evaluación de las solicitudes presentadas, siendo que en el caso de Babilcor SRL se consideró que el Centro Poblado de Bello Horizonte (Caylloma) no se encontraba ubicado dentro del área urbana del distrito al cual pertenecen en este caso el distrito de Majes y se le otorga la autorización solicitada mediante la Resolución Sub Gerencial Nº 663-2015-GRA/GRTC-SGTT, sin embargo en la resolución de fecha posterior se declara improcedente la solicitud presentada por Perú Bus Andes EIRL, indicándose que el referido centro poblado formaba parte del área urbana del distrito de Majes, contradiciendo así el criterio inicialmente empleado para el otorgamiento de la autorización para prestar el servicio de transporte hacia ese destino;

Que, asimismo en dicho documento se señala que en la Constancia de Centro Poblado del 23 de junio del 2016, emitida por la Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial de Caylloma, presentada por la Empresa de Transportes Perú Bus Andes EIRL con su recurso de apelación, se indica: *"Que los Centros Poblados de Santa María La Colina y Bello Horizonte no están dentro del Área Urbana de Villa El Pedregal Capital del Distrito de Majes, Provincia de Caylloma – Región Arequipa"*; concluyendo que la aplicación de criterios diferentes en la resolución de solicitudes de autorización de prestación del servicio de transporte idénticas, sin observar el marco legal vigente, pondría en situación de riesgo la legalidad de las decisiones adoptadas en dichos procesos, perjudicando la imagen de la institución, así como el derecho de los recurrentes, es por ello que recomienda disponer las acciones preventivas pertinentes, de cuyos resultados solicita se le informe en el plazo de diez días;

Que, por lo anterior, en observancia del principio de igualdad y no discriminación de los administrados reconocido en el artículo 2.2 de la Constitución Política del Estado que dice: *"Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (...) 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole"* (Resaltado añadido), y del principio de legalidad contenido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, resulta procedente tener en cuenta las conclusiones y recomendaciones efectuadas por el Órgano Regional de Control Institucional en el Oficio Nº 866-2016-GRA/ORCI de fecha 07-11-2016 y su Anexo, en el que se ha precisado que *"los Centros Poblados de Santa María La Colina y Bello Horizonte no están dentro del Área Urbana de Villa El Pedregal Capital del Distrito de Majes, Provincia de Caylloma – Región Arequipa"*;



Resolución Gerencial Regional Nº 0290-2016-GRA/GRTC

Que, en tal sentido, procede amparar el recurso de apelación interpuesto por la transportista declarando la nulidad de la Resolución impugnada, la que está incurso en las causales de nulidad del Art. 10º de la Ley Nº 27444, por estar vulnerando gravemente los derechos fundamentales del debido proceso administrativo, de legalidad, de impulso de oficio y de la prueba contenidos en la Constitución Política del Estado, la ley y las normas reglamentarias;

Que, asimismo, considerando que la duración del procedimiento ha excedido el plazo máximo de treinta días establecido en el Art. 142º de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, procede fijar un plazo razonable de ocho días hábiles para que el ente inferior resuelva el recurso de reconsideración, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en los puntos anteriores al haberse determinado que la transportista con la prueba ofrecida está desvirtuando y levantando plenamente las observaciones realizadas en la Resolución Sub Gerencial Nº 161-2016-GRA/GRTC-SGTT;

De conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado, de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, Ordenanza Regional Nº 130 y 239-AREQUIPA, el TUPA del Gobierno Regional de Arequipa, estando al Informe Legal Nº 351-2016-GRA/GRTC-AJ y en uso de las facultades conferidas por la **Resolución Ejecutiva Regional Nº 015-2015/GRA/PR**;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar **FUNDADO** el recurso de apelación interpuesto por la EMPRESA DE TRANSPORTES PERU BUS MAFER EIRL, con RUC 20558096072, representada por su Titular – Gerente doña Mary Lucelia Rivera Cárdenas, contra la Resolución Sub Gerencial Nº 0326-2016-GRA/GRTC-SGTT del 15 de junio del 2016, la que se deja sin efecto en todos sus extremos, disponiendo que la Sub Gerencia de Transporte Terrestre en el plazo razonable de ocho días hábiles, resuelva el recurso de reconsideración, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución, al haberse determinado que la transportista con la prueba ofrecida está desvirtuando y levantando plenamente las observaciones realizadas en la Resolución Sub Gerencial Nº 161-2016-GRA/GRTC-SGTT.

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar la ejecución de esta Resolución a la Sub Gerencia de Transporte Terrestre.

ARTICULO TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la interesada, conforme a lo establecido en la Ley Nº 27444.

Dada en la Sede de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa a los

18 NOV. 2016

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

CDA

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES

Abog. José Edgardo Gamarrá Vázquez
GERENTE REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES